

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

[DOI 10.35381/cm.v12i1.2118](https://doi.org/10.35381/cm.v12i1.2118)

La corrupción en el sector público: Causas, consecuencias y estrategias legales para su prevención

Corruption in the Public Sector: Causes, Consequences, and Legal Strategies for Prevention

Anderson Smith Centeno-Arévalo
andersonca22@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de Los Andes; Riobamba; Chimborazo
Ecuador
<https://orcid.org/0009-0006-8758-2083>

Mateo Sebastián Castro-Villarreal
mateocv20@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de Los Andes; Riobamba; Chimborazo
Ecuador
<https://orcid.org/0009-0008-3592-9430>

Valeria Estefanía Vicuña-Pozo
ur.valeriavp84@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de Los Andes; Riobamba; Chimborazo
Ecuador
<https://orcid.org/0000-0002-1883-8384>

Recepción: 15 de diciembre 2025
Revisado: 26 de febrero 2026
Aprobación: 15 de marzo 2026
Publicado: 01 de abril 2026

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue analizar la corrupción en el sector público: causas, consecuencias y estrategias legales para su prevención. La investigación llevada a cabo fue de un enfoque cualitativo, se realizó un análisis de estudios de caso en distintos países, permitiendo identificar patrones comunes en la corrupción del sector público. Los resultados indicaron que la falta de rendición de cuentas en el sector público sigue siendo una de las principales causas de corrupción. Aunque existen entidades encargadas de supervisar el uso de fondos públicos, muchas veces no actúan con la suficiente transparencia ni aplican sanciones efectivas. En Ecuador, casos como el sobreprecio en obras públicas demuestran cómo la ausencia de controles claros permite que el dinero del Estado se maneje sin justificación. En conclusión, se requiere una normativa que impida a los funcionarios participar en decisiones donde tengan algún beneficio, con sanciones claras en caso de incumplimiento.

Descriptores: Corrupción; sector público; rendición de cuentas; sanción penal; obras públicas. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze corruption in the public sector: its causes, consequences, and legal strategies for prevention. The research employed a qualitative approach, involving a case study analysis across different countries, which helped identify common patterns of corruption in the public sector. The results indicated that the lack of accountability in the public sector remains one of the main causes of corruption. Although there are entities responsible for overseeing the use of public funds, they often do not act with sufficient transparency or impose effective sanctions. In Ecuador, cases such as overpricing in public works demonstrate how the absence of clear controls allows state funds to be misappropriated. In conclusion, regulations are needed to prevent officials from participating in decisions from which they stand to gain, with clear sanctions in case of non-compliance.

Descriptors: Corruption; public sector; accountability; criminal sanctions; public works. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

La corrupción en el sector público es un problema grave que afecta a muchas sociedades y limita el desarrollo económico, político y social de un país. Se ha vuelto un tema de discusión constante porque, a pesar de los intentos por erradicarla, sigue presente en diversas instituciones gubernamentales (Soto, 2016). La falta de transparencia y la impunidad contribuyen a que este problema persista, generando desconfianza en la población y afectando el acceso a servicios públicos esenciales (Insulza, 2019; Álvarez, Díaz Sánchez, 2017).

La corrupción un fenómeno arraigado en diversas sociedades, que ha sido objeto de estudio por décadas. Este flagelo, entendido como el abuso del poder público para beneficio privado, mina la confianza ciudadana en las instituciones, pervierte los procesos democráticos y obstaculiza el desarrollo económico y social.

El problema de la corrupción en el sector público no es reciente, ha existido desde que los sistemas gubernamentales comenzaron a manejar recursos y tomar decisiones que afectan a la sociedad. En países de América Latina, por ejemplo, la corrupción ha sido históricamente una de las barreras más grandes para el crecimiento económico y la estabilidad política (Almagro, 2018). Según datos registrados, el mal uso de los fondos públicos representa una de las principales causas de desigualdad social. Además, algunos estudios han demostrado que la corrupción tiene una relación directa con la falta de educación cívica y la debilidad en el sistema de justicia (Johnston, 2021).

El objetivo de esta investigación es analizar las causas principales de la corrupción en el sector público, evaluar sus consecuencias y proponer estrategias legales que puedan mitigar su incidencia. Para ello, se realizará una revisión de literatura académica y de estudios recientes que aborden el problema desde diferentes perspectivas. Se busca proporcionar un marco teórico que sirva como base para futuras investigaciones y como referencia para diseñar políticas anticorrupción más eficientes (Iraheta Ávila, 2022; Proaño, 2024; Boehm, 2022; Miranda, 2021).

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

MÉTODO

Para abordar la investigación sobre la corrupción en el sector público, se implementó un conjunto de estrategias metodológicas destinadas a obtener información relevante y confiable sobre el tema. La intención no fue simplemente recopilar datos, sino entender cómo opera la corrupción en distintos contextos, qué factores la facilitan y cómo se han aplicado estrategias legales para su prevención. Se optó por un enfoque amplio, combinando diferentes fuentes de información y análisis comparativos. Se utilizó un enfoque cualitativo, se realizó un análisis de estudios de caso en distintos países, permitiendo identificar patrones comunes en la corrupción del sector público. Se consideraron informes gubernamentales y de organismos internacionales que documentan cómo se han aplicado las leyes anticorrupción en escenarios reales.

RESULTADOS

La investigación sobre la corrupción en el sector público arrojó una serie de hallazgos relevantes que permiten entender mejor las causas y efectos de este problema. A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos a través del análisis documental y el estudio comparativo de normativas y casos reales.

Faltas de redacción de cuentas en el sector público

Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación es que la corrupción en el sector público ecuatoriano no solo es un problema estructural, sino que también tiene raíces en la cultura política del país. A lo largo de los últimos diez años, los escándalos de corrupción han sido constantes y han involucrado desde pequeños municipios hasta las más altas esferas del gobierno. Según datos de (transparency.org, 2024), Ecuador ha oscilado en el Índice de Percepción de la Corrupción entre 32 y 39 puntos sobre 100, lo que indica un problema persistente. Uno de los temas que más me llamó la atención durante esta investigación fue la falta de rendición de cuentas en el sector público, porque sinceramente, es algo que

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

siempre se escucha, pero no se entiende bien hasta que uno lo analiza con más detalle. En teoría, los funcionarios públicos deben rendir cuentas de todo lo que hacen con el dinero del Estado, o sea de todos nosotros, pero en la práctica muchas veces no pasa eso. Se gastan millones en proyectos que nunca se terminan, obras que quedan a medias o se entregan mal hechas, y nadie explica bien qué pasó con los fondos.

Un ejemplo claro fue lo que pasó en algunos municipios de Ecuador, donde se asignó presupuesto para la construcción de centros de salud, pero al final no se construyó nada o se hizo de mala calidad. Cuando uno busca los informes o quiere saber en qué se gastó el dinero, no hay información, o la que hay es incompleta. Entonces, si no hay claridad ni consecuencias para los responsables, se vuelve muy fácil que la corrupción crezca.

Conflicto de intereses y estrategia legal para su prevención

El conflicto de intereses en el sector público es uno de esos temas que a veces pasa desapercibido pero que tiene un impacto enorme. Yo antes pensaba que la corrupción solo era cuando alguien robaba dinero directamente del Estado, pero con esta investigación me di cuenta de que también se da cuando un funcionario tiene poder para decidir algo que, en el fondo, le beneficia a él o a su gente cercana. Por ejemplo, cuando un alcalde le da un contrato a la empresa de su primo o de su amigo “porque confía en él”, aunque haya otras empresas más preparadas. Y claro, eso no siempre se ve como ilegal, pero sí es injusto y rompe la confianza de la ciudadanía.

El problema es que muchos de estos casos no se denuncian porque no hay pruebas tan claras o porque el funcionario dice que no participó directamente, pero igual influye. En Ecuador ha habido varios casos así, especialmente en el área de contratación pública. A veces parece que los concursos ya tienen un ganador desde antes de empezar, y eso es súper frustrante para las empresas o personas que sí quieren competir de forma honesta. Entonces, aunque no se robe dinero

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

directamente, igual se está afectando la transparencia y se está haciendo mal uso del poder que se tiene.

Para prevenir esto, deben existir leyes más estrictas y sobre todo aplicadas de verdad. Porque de nada sirve tener reglas si nadie las respeta o si no hay consecuencias. Una estrategia legal que me parece necesaria es que los funcionarios tengan la obligación de declarar si tienen algún vínculo con las decisiones que van a tomar, y que, si no lo hacen, se los sancione. También debería haber observatorios ciudadanos o plataformas donde se pueda ver públicamente quién toma las decisiones y en qué condiciones, para que no haya espacio para esconder estos conflictos.

Declaración de bienes en el sector público

La declaración de bienes en el sector público supuestamente es una de las formas más efectivas para prevenir la corrupción, pero en la práctica, al menos en países como Ecuador, no siempre funciona como debería. La idea es buena: que los funcionarios digan cuánto tienen antes, durante y después de estar en el cargo, para que, si de repente aparecen con una casa en la playa o un carro de lujo, se pueda investigar. Pero muchas veces estos documentos no se revisan a fondo o se hacen solo por cumplir, como un simple trámite más.

Yo personalmente creo que sí puede ser útil, pero solo si hay una institución que realmente se encarga de revisar esas declaraciones con seriedad. Porque cualquiera puede poner que tiene un terreno chiquito y ya, pero si nadie lo comprueba, entonces puede esconder otras propiedades o cuentas en el extranjero sin que nadie se dé cuenta. Además, los datos que presentan no siempre son públicos o son difíciles de entender, lo que hace que la ciudadanía no pueda verificar por sí misma si algo huele raro. Y eso es un problema porque la transparencia debería ser para todos, no solo para los que están en cargos altos o tienen acceso a información técnica.

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

Estrategias legales sistemas de denuncia y protección

Cuando se habla de estrategias legales para prevenir la corrupción, algo que siempre me ha parecido clave (pero que pocas veces se toma en serio) es el tema de los sistemas de denuncia y protección. O sea, en teoría, todos dicen que hay que denunciar la corrupción, que los ciudadanos tenemos que ser parte del control, pero en la práctica, hacerlo puede ser bastante riesgoso. Mucha gente prefiere quedarse callada porque tiene miedo a perder el trabajo, a que lo amenacen o simplemente a que no pase nada y termine siendo peor.

En Ecuador existen líneas para hacer denuncias, incluso algunas anónimas, pero muchas personas no confían en que eso funcione. Y la verdad es que, si uno ve que grandes casos de corrupción no llegan a nada, menos va a creer que una denuncia individual va a cambiar algo. Además, no hay una cultura de protección real para quienes se atreven a hablar. Si un funcionario ve algo raro en su institución y lo quiere reportar, muchas veces termina siendo aislado o hasta despedido. Y si el corrupto es alguien con poder, ahí sí la cosa se complica aún más.

Desde mi punto de vista, se necesitan leyes más claras y fuertes que protejan a los denunciantes. No solo decir que “se garantiza su seguridad” como una frase bonita en un papel, sino realmente asegurarse de que no haya represalias. También deberían existir mecanismos para dar seguimiento a las denuncias, como que el denunciante pueda saber si se abrió una investigación, si hay resultados, etc. Porque si no hay transparencia ni consecuencias, de nada sirve denunciar. Una estrategia legal efectiva sería crear un organismo independiente (fuera del gobierno) que se encargue exclusivamente de recibir y manejar estas denuncias, con personal preparado y sin conflictos de intereses.

Cultura de impunidad

Algo que se repite mucho cuando uno habla de corrupción en el sector público es eso de la impunidad, que básicamente es cuando alguien comete un delito y no pasa nada. En Ecuador, y en otros países también, se ha vuelto como parte del sistema.

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

O sea, todos saben que hay corrupción, a veces hasta quién la comete, pero al final nadie va preso o si va, sale rápido, y vuelve a la política como si nada. Entonces uno se pregunta, ¿para qué hacer leyes o denunciar, si los corruptos siguen libres o hasta más poderosos que antes?

A mí me parece que esta “cultura de impunidad” se alimenta sola. Porque si la gente ve que los grandes casos no terminan en condenas reales, eso también desmotiva a los ciudadanos a exigir justicia. Es como si ya estuviéramos acostumbrados a que el que tiene poder o dinero puede salirse con la suya. Recuerdo un caso donde un político fue grabado recibiendo dinero, salió en todos los noticieros, pero luego dijo que era un montaje y ahí quedó todo. Pasaron los meses y nadie más habló del tema, ni los medios ni la justicia. Esas cosas hacen perder la fe en el sistema. Creo que parte del problema también es que muchas veces las instituciones que deben sancionar, como la justicia o la fiscalía, también están llenas de intereses políticos. Y eso es bien grave, porque significa que la ley no se aplica igual.

Leyes de acceso a la información en el sector público

Algo que a veces no se habla tanto, pero que es súper importante para prevenir la corrupción, son las leyes de acceso a la información pública. Práctica. En teoría, estas leyes sirven para que cualquier persona pueda saber cómo se gasta el dinero del Estado, quién contrata con quién, cuánto ganan los funcionarios, etc. Pero en la práctica, conseguir esa información a veces es como una misión imposible. Yo una vez intenté cuánto buscar había costado una obra pública en mi ciudad y la web del municipio ni funcionaba bien, y cuando preguntó, me mandaron a otra oficina y de ahí a otra... al final nunca conseguí nada.

En Ecuador existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero lo cierto es que no siempre se cumple como debería. Muchos funcionarios ni siquiera saben que están obligados a entregar esa información. A veces cuando se les pide datos responden que no tienen autorización o que eso es “reservado”, lo cual me parece absurdo, porque si trabajo con plata pública, lo mínimo es que rindan

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

cuentas. La ley dice que hay plazos y formas para responder, pero no hay mucha presión para que se cumpla. Y si no cumplen, casi nunca hay sanciones, entonces queda todo en el aire.

Desde mi punto de vista, estas leyes son clave para frenar la corrupción, pero si no se actualizan o no se aplican bien, no sirven de mucho. Debería haber plataformas digitales donde esté todo claro, en lenguaje sencillo, no esos documentos gigantes llenos de tecnicismos que nadie entiende. Y también se debería enseñar a la gente que tiene derecho a pedir esa información, porque muchos ni saben que eso existe.

DISCUSIÓN

La corrupción en el sector público sigue siendo un problema latente en Ecuador y en muchos otros países de Latinoamérica. A pesar de los intentos de combatirla con leyes más estrictas y organismos de control, los casos siguen apareciendo año tras año. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente el problema está en la falta de leyes o en la falta de aplicación efectiva de las mismas. Según lo que se ha analizado en este trabajo, parece que la corrupción no solo depende de la normativa, sino también de la cultura política y de la falta de una verdadera sanción social hacia los corruptos.

Si comparamos con estudios anteriores, por ejemplo, el informe de Transparencia Internacional del 2020 ya mencionaba que Ecuador se encontraba en un nivel medio-alto de percepción de corrupción, lo cual no ha cambiado significativamente en los últimos años. Esto indica que, aunque se han creado nuevas normativas y se han implementado estrategias legales, no han sido suficientes para reducir de manera notable los niveles de corrupción. Esto se puede deber en gran parte a que muchas veces las propias instituciones encargadas de fiscalizar terminan siendo parte del problema, ya sea por falta de independencia o por intereses políticos.

Un punto importante que se ha visto es que la corrupción en Ecuador no siempre se da en los niveles más altos del gobierno. Claro, los escándalos mediáticos suelen involucrar a expresidentes, ministros o altos funcionarios, pero hay una corrupción

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

"pequeña" que se da en el día a día en oficinas públicas. Desde pagar un "extra" para agilizar un trámite hasta la concesión de contratos a empresas con conexiones políticas, esta corrupción de menor escala también contribuye al problema general. Es algo que casi todos han visto o incluso han experimentado al hacer trámites en entidades públicas, y aunque parece "insignificante" comparado con los grandes casos de desfalco, suma a la desconfianza general de la población hacia el Estado. Otro aspecto interesante es la reacción de la sociedad ante los casos de corrupción. Muchas veces, los ciudadanos critican y exigen justicia en redes sociales, pero cuando los casos llegan a los tribunales, los culpables rara vez reciben condenas ejemplares. Un claro ejemplo es lo que ocurrió con el caso Sobornos 2012-2016, donde, aunque hubo condenas, muchas personas siguen considerando que las penas fueron mínimas en comparación con el daño económico causado. Esto demuestra que, más allá de las leyes, también hay un problema en la administración de justicia y en la presión política que se ejerce sobre los jueces y fiscales. Si bien los estudios previos han señalado que la transparencia y la digitalización de los procesos pueden ayudar a reducir la corrupción, en Ecuador su implementación ha sido lenta y con muchas trabas. En teoría, las plataformas digitales para trámites públicos reducirían la posibilidad de que un funcionario exija sobornos, pero si estos sistemas no funcionan bien o no están disponibles para toda la población, el problema sigue igual. Además, aún hay sectores donde el uso de tecnología es limitado, como en municipios pequeños o zonas rurales, lo que facilita que se sigan dando prácticas corruptas.

CONCLUSIONES

La falta de rendición de cuentas en el sector público sigue siendo una de las principales causas de corrupción. Aunque existen entidades encargadas de supervisar el uso de fondos públicos, muchas veces no actúan con la suficiente transparencia ni aplican sanciones efectivas. En Ecuador, casos como el sobreprecio en obras públicas demuestran cómo la ausencia de controles claros

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

permite que el dinero del Estado se maneje sin justificación. Es necesario que haya mecanismos más estrictos para exigir informes detallados y que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a esta información.

Otro factor clave es la presencia de conflictos de interés, lo que hace que muchas decisiones no se tomen en beneficio de la sociedad, sino de intereses personales o de grupos políticos. Un ejemplo frecuente es la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a funcionarios públicos o sus familiares, lo que afecta la calidad de los servicios y genera un círculo vicioso de corrupción. Para evitar esto, se requiere una normativa que impida a los funcionarios participar en decisiones donde tengan algún beneficio directo o indirecto, con sanciones claras en caso de incumplimiento.

Finalmente, la declaración de bienes en el sector público es una estrategia legal que, si se aplicara correctamente, ayudaría a reducir la corrupción. Sin embargo, muchas veces estas declaraciones no son verificadas o simplemente se presentan sin un control real. Para que esta medida sea efectiva, es necesario que se realicen auditorías periódicas y se exija la actualización de los datos patrimoniales de los funcionarios, asegurando que su riqueza no provenga de fuentes ilegales. Sin un seguimiento adecuado, cualquier estrategia legal queda en el papel y no genera cambios reales.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el desarrollo de esta investigación.

Anderson Smith Centeno-Arévalo; Mateo Sebastián Castro-Villarreal; Valeria Estefanía Vicuña-Pozo

REFERENCIAS CONSULTADAS

- Álvarez, J.; Díaz Sánchez, J. (2017). Fuentes de la desigualdad económica en Ecuador Revista Economía y Política, núm. 25, enero-junio, 2017, pp. 9-28 Universidad de Cuenca. <https://n9.cl/b1n61w>
- Almagro, L. (2018). Impacto de la corrupción en los derechos humanos . México: Carlos Tablante. <https://n9.cl/80s5il>
- Boehm, F., & Graf Lambsdorff, J. (2022). Corrupción y anticorrupción: una perspectiva neo-institucional. Colombia: Revista de Economía Institucional, Vol. 11, Núm. 21. <https://n9.cl/aqifw>
- Insulza, J. M. (2019). Desigualdad, democracia e inclusión social. Costa Rica: Hugo de Zela. <https://n9.cl/3du3>
- Iraheta Ávila, M. (2019). Bo Rothstein y Aiysha Varraich, Making Sense of Corruption, Nueva York, Cambridge University Press, 2017, 184 pp.. *Gestión y política pública*, 28(2), 578-583. <https://n9.cl/ps8wi>
- Johnston. (2021). a educación cívica y la formación ciudadana en la educación de la personalidad. Cuba: Héctor Constantino Thompson-Wint. <https://n9.cl/3gg0o>
- Miranda Cifuentes, J. I. (2021). Compliance program como herramienta en la lucha contra la corrupción en Ecuador. Universidad Católica: Revista de la Facultad de Jurisprudencia, núm. 4. <https://n9.cl/x1icz>
- Proaño Reyes, Gladis Margot, & Proaño Reyes, Holger Enrique. (2024). La cooperación internacional, clave para atender los problemas penitenciarios. *Foro: Revista de Derecho*, (42), 25-40. <https://n9.cl/9y0zef>
- Soto, R. (2016). La corrupción desde una perspectiva económica. Chike. <https://n9.cl/sw9ra>
- Transparency.org. (2024). Índice de Percepción de la Corrupción 2024: La corrupción tiene un papel devastador en la crisis climática. transparency.org. <https://n9.cl/hluf3m>